



**Sobre la próxima apelación del juicio de Matrozou 45
el 2 de diciembre de 2025**

La Comunidad de Okupas de Koukaki (Matrozou 45, Panaitoliou 21, Arvali 3) fue un proyecto habitacional y político que, durante casi tres años de existencia (2017–2020), apoyó las necesidades materiales y políticas de muchas personas.

Como parte del movimiento okupa más amplio, pusimos la lucha antiautoritaria en el centro de la vida cotidiana. Construimos relaciones con nuestrxs vecinxs y otras okupas, participando tanto en iniciativas locales como en luchas más amplias: acciones por la defensa de la Colina de Filopappou frente a la privatización, intervenciones feministas, resistencia contra los centros de detención de migrantes, solidaridad con presxs políticxs, creación de una asamblea abierta contra la turistificación del barrio y organización para defender los espacios okupados, etc.

El carácter público de la comunidad se reforzó con estructuras de solidaridad social —como una biblioteca comunitaria, duchas y lavandería públicas y un bazar de ropa gratuito— centradas en cubrir necesidades básicas sin intercambio económico ni lucro. En el mismo espíritu, cubríamos nuestras necesidades alimentarias con productos sobrantes de los mercados y panaderías locales de Koukaki, donde distribuíamos el periódico anarquista *Apatris* y nuestros propios textos, invitando a la gente a participar en las cocinas colectivas y los eventos en las okupas de la comunidad.

La elección de okupar nos permitió reducir drásticamente los gastos de vida, lo que significaba dedicar el mínimo tiempo posible al trabajo asalariado. Esto no se trataba solo de descansar más, sino principalmente de poder participar de manera más activa y constante en las luchas sociales. **Hoy, la okupación como solución habitacional es más necesaria que nunca:** cuando los alquileres se disparan mientras los salarios se reducen, cuando las viviendas vacías y Airbnb hacen imposible encontrar casa y cuando los embargos de viviendas primera residencia se vuelven rutina, la ocupación de edificios abandonados no es solo una necesidad: es una **exigencia política**.

En Koukaki, la explosión del turismo y los alquileres de Airbnb ha convertido el barrio en un hotel gigante. Muchos residentes han sufrido subidas masivas de alquiler o han sido desalojados para dar paso a viviendas temporales para turistas. Los pequeños comercios de barrio han cerrado, reemplazados por restaurantes y cafés hiptsers que invaden el espacio público. En los últimos dos años, una ola de construcción de apartamentos de lujo ha transformado drásticamente el carácter del área, debilitando los lazos comunitarios a medida que lxs residentxs permanentes son reemplazadx por turistas.

Estas transformaciones violentas, impulsadas por la gentrificación, se repiten por toda Grecia (desde las islas y pueblos de montaña hasta los centros urbanos) como resultado directo de políticas estatales al servicio de corporaciones internacionales, promotores y propietarios. Nuestra resistencia

frente a ello llevó a la creación de la *Asamblea de Vecinos de Koukaki y Áreas Circundantes contra Airbnb*.

Una situación similar se desarrolla hoy en Exarchia, donde la presencia policial permanente, la construcción del metro en la plaza principal y los intentos de eliminar los procesos políticos en la Universidad Politécnica, forman parte de una campaña estatal para borrar la identidad política e histórica del barrio. En respuesta, vecinxs, colectivos y grupos afines hacen todo lo posible por mantener vivo el espíritu de resistencia.

Más allá de una necesidad, okupar es una postura política.

Las okupas son hogares que albergan nuestras luchas y nuestros vínculos. En ellas, la vida cotidiana se basa en la colectivización, la autoorganización, la inclusión y la solidaridad. La Comunidad de Okupas de Koukaki defendía la unión entre vida y lucha: nuestra oposición a toda forma de autoridad (de género, edad o raza) comenzaba en nuestros propios hogares, mostrando tanto nuestras fuerzas como nuestras debilidades colectivas. Al promover una forma de vida colectiva e igualitaria, alejada de la ideología dominante del individualismo y la propiedad, la okupación de un edificio vacío —junto con la expropiación de bienes esenciales como la electricidad y el agua— ponía al frente la idea de que nuestras necesidades y deseos no deben convertirse en mercancía.

El movimiento okupa entra en conflicto directo con la irracionalidad del capitalismo.

Por eso, la represión de los espacios okupados en todo el mundo —ya sea mediante calumnias o desalojos violentos— es una condición necesaria para el libre flujo del capital.

La comunidad de Koukaki no fue una excepción a la represión del estado y los ataques fascistas. Concretamente, después del desalojo de Matrozou 45 en Marzo de 2018, bajo el gobierno de SYRIZA, hubo tres ataques incendiarios fascistas contra Panaitoliou 21. Estos ataques solo cesaron cuando uno de los atacantes - miembro de la organización neonazi *Combat 18 (C18)*- fue arrestado.

En Diciembre de 2019, tras el famoso “ultimátum de desalojo”- emitido a todas las okupas de Atenas de la época, del ministro Chrysochoidis- el estado, tratando de eliminar nuestra presencia del barrio, desalojó nuestras tres casas. Durante la operación, arrestaron a lxs okupas de Panaitoliou 21 y Arvali 3, así como a una familia vecina a Matrozou, solo porque la policía no logró encontrar a lxs okupas dentro.

Sin embargo, desde el primer desalojo en 2018, veníamos buscando formas de defendernos mejor frente a futuras represiones. Cuando el poder cambió de manos y un gobierno que claramente

atacaba al movimiento anarquista llegó al poder, **la represión contra estructuras autogestionadas aumentó con el objetivo de dismantelar al movimiento anarquista. Los desalojos de nuestra comunidad formaron parte de esa campaña más amplia.**

Los desalojos se llevaron a cabo con un amplio rango de tácticas represivas: golpes, balas de goma, granadas aturdidoras, gases, acoso sexual, torturas y humillaciones. **Pero estos ataques fueron respondidos con espíritu colectivo de resistencia y solidaridad, lo que permitió la reocupación de Matrozou y Panaitoliou, gracias al apoyo de decenas de compañerxs dentro y fuera de nuestras casas.** A pesar de los ataques policiales a las concentraciones solidarias, lxs compañerxs no abandonaron. Mientras la policía intentaba invadir nuestras casas, alrededor de 200 personas se manifestaban en el barrio, otras 200 se concentraban cerca de Matrozou, decenas se acercaban a Panaitoliou y alrededor de 50 vecinxs gritaban consignas en apoyo a lxs okupas que resistían, los cuales vaciaban su casa por encima de las cabezas de la EKAM (Unidad Especial Antiterrorista griega).

Aunque la policía actuó con rapidez, su plan de desalojar todas las okupas se aplazó durante seis meses, gracias a la resistencia de las okupas que se expandió por toda Grecia. Desde carteles y pegatinas hasta furgonetas de turistas quemadas, manifestaciones, intervenciones y concentraciones solidarias en los tribunales, **el movimiento demostró que sabe defender sus estructuras y no está dispuesto a retroceder.** (ejemplo: la defensa combativa de la okupa de Dougru en Larisa, Prosfygika en Atenas y la reconstrucción de la okupa Libertatia en Salónica).

Cinco años después de los desalojos

Cinco años después, nuestras casas siguen tapiadas e inútiles para la sociedad. Las paredes de Matrozou se pudren, mientras los edificios de Panaitoliou y Arvali se venden para convertirse en apartamentos de lujo cerca de Filopappou. **Pero además del desalojo, el sistema judicial completa el círculo de violencia física y psicológica con condenas.**

Reconociendo las salas de juzgados como un campo de batalla más, nosotrxs hemos defendido nuestras acciones y vínculos de solidaridad en cada juicio. Desde las absoluciones por la reocupación de Panaitoliou y Arvali hasta condenas —12 meses en primera instancia por el primer desalojo de Panaitoliou (2019), 4–18 meses por el primer desalojo de Matrozou (2018) y **77 meses** en primera instancia por el tercer desalojo de Matrozou (2020), ahora nos encontramos frente a esta última encarcelación.

El 29 de Octubre de 2024 concluyó el juicio de primera instancia por la reocupación de Matrozou 45 (2020), con una compañera aún pendiente de juicio por ser menor en ese momento.

Lxs compañerxs fueron condenadx a 6 años y medio de prisión, con cumplimiento efectivo (aunque la apelación suspende temporalmente la pena). Los cargos: a) lesiones agravadas y b) daños a la propiedad por equipo policial y un reloj de un policía.

El juicio estuvo marcado por la interferencia estatal desde el principio, desde el intento de la policía de presentarse como parte civil con abogados (incluso candidatos del partido Nueva Democracia), informes televisivos difamatorios que trataban de despolitizar nuestras acciones, hasta artículos de periódicos filtrando datos personales. El Estado, los medios y los sindicatos policiales crearon un clima hostil deliberado en contra de las okupas y cualquiera que las defendiera.

El estado nos había condenando desde el principio, asistido por los sindicatos de policía, ministros y el propio primer ministro cuyo objetivo principal era meternos en la cárcel con cargos de delito grave.

La intervención del estado también continuó dentro de la sala del tribunal: la negativa del tribunal a conceder circunstancias atenuantes y la reaparición en la sala de los demandantes civiles previamente excluidos, revelaron una sentencia predeterminada de castigo severo.

Una sentencia de 77 meses, impuesta tras casi cinco años más tarde, para restaurar el prestigio del Estado policial

La sentencia de 77 meses no se basó en pruebas, sino en testimonios contradictorios de policías, reforzando la idea de que “lo que dice la policía es la verdad”. Más allá de su carácter vengativo, esta decisión busca atemorizar al movimiento okupa. Las recientes reocupaciones en Chaniá Atenas, Heraklion, Tesalónica y Patras, alarmaron al Estado, que intentó frenar la ola, sin éxito. Espacios como Zizania (Atenas), Ano Kato Patission (Atenas), Evangelismos (Heraklion), Rosa Nera (Chania), Parartima (Patras) y Utopia A.D. (Komotini) han vuelto a ser reocupados.

La amenaza de prisión pende sobre nosotrxs como una espada de Damocles, una demostración del poder estatal para infundir miedo en quienes actúan fuera de la sofocante legalidad impuesta. Jugando con la posibilidad de encarcelación, el estado intenta neutralizar a nivel social aquellos fragmentos de la sociedad que resisten y actúan de manera “ilegal”.

Este resultado del juicio en primera instancia, con su duro castigo, se suma a la represión judicial de muchxs compañerxs, a los encarcelamientos basados en acusaciones débiles, a los secuestros, allanamientos y detenciones preventivas. Creemos que tal resultado marcará el futuro, allanando el camino hacia la cárcel para lxs okupas que defienden ferozmente sus espacios de lucha y su existencia en las calles. Tal posibilidad se ajusta plenamente al nuevo Código Penal (2024), que

sugiere el encarcelamiento incluso para delitos menores, que hasta ahora se castigaban con la suspensión de la pena. El endurecimiento del Código Penal tiene un carácter punitivo y vengativo, lo que exacerba aún más las desigualdades sociales y de clase. Es una arma más en el arsenal del estado, que aumenta la población carcelaria, alarga las condenas y empeora las condiciones de detención.

El hecho de que el nuevo Código Penal aún no se haya aplicado plenamente en los casos de juicios a anarquistas, demuestra que el estado, aunque sueña con encarcelar a quienes resisten, teme al mismo tiempo al movimiento anarquista y sopesa las reacciones sociales frente a sus decisiones represivas. Y las reacciones son cada vez mayores: contra los desahucios, la persecución de médicxs y profesorxs, el archivo de casos como el del accidente de trenes de Tempi, el aumento de los incidentes de violencia policial, las leyes en contra de derechos laborales, el encubrimiento de los asesinatos estatales, violaciones de menores, escándalos políticos y económicos y la explotación implacable de la naturaleza.

Contra la doctrina de «ley y orden» de la gestión neoliberal, la acción colectiva y la defensa de quienes están siendo atacados deben ser nuestros objetivos principales.

La apelación por Matrozou 45 tendrá lugar el 2 de Diciembre de 2025, casi un año después del juicio en primera instancia. La solidaridad, por cualquier medio, puede servir como barrera contra la venganza del Estado, demostrando que no dejamos solx a ningúnx compañerx.

Más información sobre la comunidad de Koukaki y la campaña:

<https://nosquatterinprison.noblogs.org/>

10-100-1000 (RE)OKUPACIONES

VIOLENCIA CONTRA LA VIOLENCIA DEL PODER

SOLIDARIDAD CON QUIENES DEFIENDEN SUS LUCHAS

¡NINGÚN OKUPA EN PRISIÓN!

TODXS AL TRIBUNAL DE APELACIÓN EL 2 DE DICIEMBRE DE 2025

SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES Y LUCHAS,

NUESTROS COMPAÑEROS LARY (THANASIS) ARMAOS Y DIMITRIS ARMAKOLAS

